

RESOLUCION N. 01641

“POR LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA DE UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 02566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

I. ANTECEDENTES

Que mediante queja con Radicado DAMA No. 14593 del 9 de mayo de 2003, se denunció la tala de árboles sin autorización en la transversal 33 No. 143-50, de esta ciudad.

Que en consecuencia, la Subdirección Ambiental Sectorial – DAMA, practicó visita el 20 de mayo de 2003 y se emitió el Concepto Técnico No. 5784 de fecha 4 de septiembre del 2003, en el cual se señala que la dirección corresponde al espacio público andén oriental de la carrera 33 del Conjunto Residencial Torres de Bilbao se retiraron dos (2) arbolitos que estaban ubicados en el andén oriental.

Que mediante Auto No 4681 del 30 de diciembre de 2003 - DAMA, se dispuso iniciar proceso sancionatorio en contra del Conjunto Residencial Torres de Bilbao, ubicado en la transversal 33 No 143 - 50 de esta ciudad, representado legalmente por su administrador o quien haga sus veces, por la tala de dos (2) árboles sin previa autorización del DAMA, conducta violatoria del artículo 57 del decreto 1791 de 1996 y artículo 5 del Decreto 068 de 2003.

Que por Auto No 4682 del 30 de diciembre de 2003 se dispuso formular en contra del Conjunto Residencial Torres de Bilbao, ubicado en la Transversal 33 N° 143 - 50 de esta ciudad,

representado legalmente por su administrador o quien haga sus veces, el siguiente cargo: por la tala de dos (2) árboles sin previa autorización del DAMA, conducta violatoria del artículo 57 del Decreto 1791 de 1996 y artículo 5 del Decreto 068 de 2003, contando como pruebas con la queja con radicado DAMA 2003ER14593 del 9 de mayo de 2003 y el Concepto Técnico No. 5784 del 4 de septiembre de 2003, expedido por la Subdirección Ambiental Sectorial – DAMA.

Que el acto administrativo de formulación de cargos, fue notificado personalmente al señor Carlos Alberto Bobadilla Becerra, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.196.592 de Bogotá, en su calidad de Representante legal de Edificio Torres de Bilbao - Propiedad Horizontal, el 22 de enero de 2004, quien no interpuso el recurso de ley, por lo cual quedó debidamente ejecutoriado el 6 de febrero de 2004.

Que se profirió la Resolución No. 1373 del 13 de junio de 2005, en virtud de la cual se dispuso declarar responsable al Edificio Torres de Bilbao — Propiedad Horizontal, a través de su representante legal o quien haga sus veces, ubicado en la transversal 33 N° 143 — 50, de la localidad Usaquén de esta ciudad, por la tala de dos (2) arbolitos que estaban ubicados en espacio público del andén oriental de la carrera 33, sin la autorización de la autoridad ambiental competente; así mismo sancionó con multa de uno y medio salarios mínimos mensuales legales vigentes y ordenó el pago de la suma equivalente a trescientos trece mil ciento treinta y cinco pesos moneda corriente (\$313.135) M/CTE., por concepto de compensación.

Que la resolución de sanción, fue notificada el 29 de julio de 2005, al señor Carlos Humberto Bobadilla Becerra, en calidad de representante legal del Edificio Torres de Bilbao — Propiedad Horizontal, quien dentro del término legal, interpuso recurso de reposición con radicación DAMA 2005ER27642 del 5 de agosto de 2005.

Que mediante Resolución No. 2336 del 13 de octubre de 2006, se aclaró y se confirmó la Resolución No. 1373 del 13 de junio de 2005, en el sentido de indicar que el valor neto, correspondiente a uno y medio salario mínimo mensual legal vigente, es la suma de quinientos setenta y dos mil doscientos cincuenta pesos m/cte, (\$572.250) y por la tala de dos (2) arbolitos que estaban ubicados en espacio público del andén oriental de la carrera 33, sin autorización de la autoridad ambiental competente, que declaró como responsable al Edificio Torres de Bilbao — Propiedad Horizontal, a través de su representante legal o quien haga sus veces, ubicado en la Transversal 33 N° 143 — 50, de la localidad Usaquén en la ciudad de Bogotá D.C.

Que el anterior acto administrativo fue notificado al señor Carlos Humberto Bobadilla Becerra, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.196.592 en calidad de representante legal del Edificio Torres de Bilbao — Propiedad Horizontal, en fecha 03 de noviembre de 2006.

I. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

• Fundamentos Constitucionales

La regulación Constitucional de los recursos naturales en Colombia se estructura a partir de la duplicidad del concepto de protección, el cual es atribuido al Estado y a los particulares como lo describe el artículo 8° de la Carta Política, el cual señala literalmente que:

*“(…) **ARTÍCULO 8.** Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.*

El artículo 58 de la Carta Política establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una función ecológica.

Así mismo, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, estableciendo que es deber del Estado la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la educación para el logro de estos fines.

Esta obligación comprende elementos como la planificación y control de los recursos naturales, con el fin de asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución; en tanto que su función de intervención, inspección y prevención se encamina a precaver el deterioro ambiental, a hacer efectiva su potestad sancionatoria, y exigir a manera de reparación los daños que se produzcan a aquellos, tal y como lo establece el artículo 80 Constitucional.

• Fundamentos Legales

El artículo 66 de la Ley 99 de 1993 establece que *“Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1'000.000) de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.”*

El inciso 2° del artículo 107 ibídem, señala:

*“(…) **ARTÍCULO 107.-** (...) Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares”.*

El Derecho Administrativo Sancionador, se erige como un importante mecanismo de protección del ambiente, en cuanto brinda a los poderes públicos encargados de la gestión ambiental, la

obligación de adoptar medidas en procura de dar cumplimiento al mandato constitucional y legal de propender por el interés general, al cual deben someterse las decisiones administrativas dentro de nuestro Estado Social de Derecho.

En ese sentido, si bien el desarrollo de toda actividad comercial particular tiene como propósito fundamental el satisfacer los intereses privados de sus propietarios, el ejercicio de las actividades de esta índole debe observar las normas que para cada caso se establezcan. En esa línea se ha pronunciado la Corte Constitucional mediante sentencia T-254 de 1993, M.P Antonio Barrera Carbonell, a través de la cual señaló que:

“(…) Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinan al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación.” (Negritas y subrayas fuera del texto original).

El artículo 11 de la Ley 1333 de 2009, respecto a los actos no ejecutados establece: *“Pérdida de fuerza ejecutoria. Las sanciones impuestas y no ejecutadas perderán fuerza ejecutoria en los términos del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo o las normas que lo sustituyan o adicione”*.

Que en ese sentido y teniendo en cuenta que las actuaciones dentro del presente trámite se iniciaron en vigencia de la Ley 1437 de 2011, corresponde remitirnos a lo establecido en el artículo 91 de la citada Ley:

“Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.”

II. DEL CASO EN CONCRETO

Revisada la Resolución No. 1373 del 13 de junio de 2005, aclarada mediante Resolución No. 2336 del 13 de octubre de 2006, dentro proceso sancionatorio contenido en el expediente No. **SDA-08-2003-1404**, encuentra esta Secretaría pertinente evaluar su procedencia; o si en su

defecto, dado que han transcurrido más de cinco (5) años de estar en firme, sin que la autoridad haya realizado los actos correspondientes para ejecutarlos declarar su pérdida de fuerza ejecutoria.

Así las cosas, se observa que lo dispuesto en el acto que ordena la disposición final del material incautado, no es posible cumplirlo por el tiempo transcurrido, por lo cual se debe declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 antes citado.

Cabe resaltar, que la pérdida de fuerza de ejecutoria no supone que se dude de la validez del acto administrativo sobre el cual recae ésta, sino que establece la pérdida de capacidad de ejecutoriedad del acto, por lo cual no puede generar efectos jurídicos a futuro, tal como lo ha manifestado en la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 18 de febrero de 2010 (Consejero ponente, Enrique Gil Botero, No. 11001-03-26-000-2007-00023-00(33934)), en la cual señala que *“Este fenómeno constituye una vicisitud que afecta la eficacia del acto administrativo y no su validez, de allí que ya no es posible hacer cumplir su contenido por haber desaparecido su carácter obligatorio.”*

Bajo este escenario, y a la luz de la citada norma, ocurre la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo, basado en el numeral 3, *“Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos”*.

Por las razones antes dadas, a esta Secretaría no le queda más que declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 1373 del 13 de junio de 2005, aclarada mediante Resolución No. 2336 del 13 de octubre de 2006, dado el transcurso de los cinco años descritos en la norma sin que la autoridad ambiental haya efectuado los actos correspondientes, para ejecutar lo ordenado.

III. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En relación con la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, se modificó la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades del Distrito, dentro de las cuales se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente.

En virtud del Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 del 04 de mayo de 2009, se estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignando las funciones de sus dependencias dentro de las cuales, está la de *“emitir los actos administrativos (...) en los procesos de evaluación para el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, licencias ambientales y medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, así como los requeridos para el control y seguimiento ambiental.”*

Conforme lo establecido en el Numeral 2° del artículo 1° de la Resolución 1466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 2566 del 15 de agosto de 2018, el Secretario Distrital de Ambiente delegó en cabeza de la Dirección de Control Ambiental, la función de “7. Expedir los actos administrativos que, de oficio o a petición de parte, declaran o niegan, la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos emitidos dentro de los procesos sancionatorios”.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria de las Resoluciones No. 1373 del 13 de junio de 2005 y la Resolución No. 2336 del 13 de octubre de 2006, dentro del proceso sancionatorio contenido en el expediente No. SDA-08-2003-1404, que declaró como responsable al EDIFICIO TORRES DE BILBAO — PROPIEDAD HORIZONTAL, a través de su representante legal o quien haga sus veces, ubicado en la Transversal 33 No. 143 — 50 de la localidad Usaquén, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

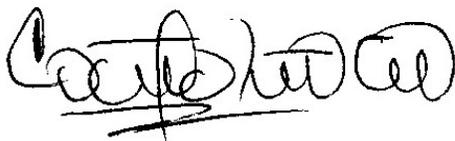
ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar el contenido de la presente decisión **EDIFICIO TORRES DE BILBAO — PROPIEDAD HORIZONTAL**, a través de su representante legal el señor **CARLOS HUMBERTO BOBADILLA BECERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **19.196.592** o quien haga sus veces, ubicado en la dirección **Transversal 33 No. 143 — 50 de la localidad Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C.**, de acuerdo a la dirección que registra en el expediente de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO. – Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo primero de este proveído, una vez en firme la presente resolución, ordenar el archivo del expediente **SDA-08-2003-1404**, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. - Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual se podrá interponer personalmente o por intermedio de apoderado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos legales conforme a lo dispuesto en los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de junio del año 2021



CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

LILIANA LOPEZ YANES	C.C: 26201868	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20211259 DE 2021	FECHA EJECUCION:	21/06/2021
---------------------	---------------	----------	--------------------------------------	---------------------	------------

Revisó:

SANDRA MILENA BETANCOURT GONZALEZ	C.C: 30393351	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 2021-1145 DE 2021	FECHA EJECUCION:	22/06/2021
--------------------------------------	---------------	----------	---------------------------------------	---------------------	------------

Aprobó:

Firmó:

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	C.C: 80016725	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	22/06/2021
------------------------------------	---------------	----------	------------------	---------------------	------------

Expediente: SDA-08-2003-1404